

PUNTOS DE SUSCRICION.

En ZARAGOZA, en la Administracion del BOLETIN, sita en la Imprenta de la Casa-Hospicio de Misericordia.

Las suscripciones de fuera podrán hacerse remitiendo su importe en libranza del Tesoro ó letra de fácil cobro.

La correspondencia se remitirá franqueada al Director-Administrador del BOLETIN OFICIAL, D. Baldomero Mediana y Ruiz.



PRECIO DE SUSCRICION.

TREINTA PESETAS AL AÑO.

Las reclamaciones de números se harán dentro de los 12 días inmediatos á la fecha de los que se reclaman; pasados estos, la Administracion sólo dará los números, previo el pago, al precio de venta.

Números sueltos, 25 céntimos de peseta cada uro.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA.

ESTE PERIÓDICO SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS LÚNES.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno son obligatorias para cada capital de provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días despues para los demas pueblos de la misma provincia. (Decreto de 28 de Noviembre de 1837.)

Inmediatamente que los señores alcaldes y secretarios reciban este BOLETIN, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente.

Los señores secretarios cuidarán bajo su más estrecha responsabilidad de conservar los números de este BOLETIN, coleccionados ordenadamente para su encuadernacion, que deberá verificarse al final de cada semestre.

PARTE OFICIAL.

SECCION PRIMERA.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL ÓRDEN.

La Seccion de Gobernacion del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictámen:

«Excmo. Sr.: D. Víctor Soler, en representacion de la testamentaria de la Marquesa de Camachos, pidió al Ayuntamiento de Murcia en 10 de Setiembre de 1877 que se sirviese manifestarle si habia autorizado á Doña Dolores García Ruiz, viuda de Estor, y al Conde de la Concepcion, ó sus respectivos administradores, para verificar las obras que estaban ejecutando en el cauce ó camino viejo de Alcantarilla, y en caso de haber otorgado tal permiso, que se suspendiese la ejecucion del acuerdo, porque lesionaba los derechos civiles de dicha testamentaria é infringia el convenio celebrado entre esta y la Municipalidad en 16 de Octubre de 1876, con objeto de reparar los perjuicios que se infringieron á aquella testamentaria con las obras mandadas construir por el Ayuntamiento á fin de evitar los efectos de las inundaciones.

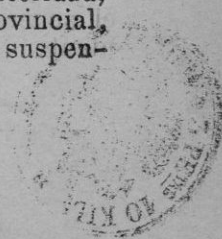
Esta corporacion acordó: primero, decir al recurrente que no habia autorizado las obras á que se referia; y segundo, que el Alcalde diese las

órdenes convenientes para que fuesen sin demora destruidas. Esto último quedó cumplido en 25 del propio mes de Diciembre, segun comunicacion del Alcalde del Rincon de la Seca, que obra en el expediente.

Con fecha 20 de Diciembre siguiente el Alcalde de Murcia invitó al Juez de primera instancia del distrito de San Juan á que en el caso de presentarse algun interdicto acerca de las obras ejecutadas en el camino viejo de Lorca, tuviese en cuenta que lo habian sido por acuerdo del Ayuntamiento; y en vista de que el Juez contestó haber dictado ya auto restitutorio, aquella Autoridad pidió al Gobernador que requiriese de inhibicion al Juzgado, porque no se podian admitir interdictos contra los acuerdos dictados por los Ayuntamientos en materias de su competencia.

Posteriormente el Ayuntamiento, fundado en que las obras denunciadas por D. Víctor Soler no formaban parte del plan general aprobado por la Municipalidad para llevar á efecto lo convenido entre la misma y la testamentaria de la Marquesa de Camachos, acordó en 4 de Marzo del año último poner en conocimiento del Gobernador que la Corporacion no asumia responsabilidad alguna en las cuestiones á que pudiera dar margen el interdicto.

El Alcalde interino, accediendo á la peticion del representante de Doña Dolores García Ruiz, viuda de Estor, suspendió tal acuerdo; y pasado el expediente al Gobernador, esta Autoridad, aceptando el informe de la Comision provincial, desestimó el recurso y dejó sin efecto la suspen-



sion, porque el acuerdo del Ayuntamiento no podia ser apelado ni suspendido, una vez que ni creaba derechos ni lesionaba intereses, ni tuvo más objeto que el de hacer constar la inexactitud de lo dicho por el Alcalde respecto á que las obras origen del interdicto hubiesen sido autorizadas por la Corporacion.

No conformándose la interesada con esta resolucion, suplica á V. E. que, por las razones que expone, se sirva dejarla sin efecto; y caso de no anular tambien desde luego el acuerdo de la Municipalidad, que se declare que estuvo en su lugar la suspension dictada por el Alcalde accidental.

Segun el art. 169 de la ley orgánica de 2 de Octubre de 1877, los Alcaldes pueden suspender por sí, y á instancia de cualquier residente en el pueblo, la ejecucion de los acuerdos de los Ayuntamientos en los dos casos siguientes: primero, por haber recaido en asuntos que no sean de su competencia; y segundo, por delincuencia; y con arreglo al art. 170, debe el Alcalde suspender tambien, pero sólo á peticion de parte, los acuerdos que se hallen en el primero de los casos citados, cuando de su ejecucion hubiese de resultar perjuicio en los derechos civiles de un tercero, el cual al par que solicita la suspension tiene que reclamar contra el acuerdo.

De este último precepto no se desprende seguramente que para suspender los acuerdos á que se refiere baste con que cualquier persona lo solicite alegando que le perjudican en sus derechos privados, sino que es preciso que á esto se agregue la incompetencia del Ayuntamiento para adoptarlos.

Así, pues, lo primero que cumplia hacer al Alcalde accidental al recibir la instancia de don Ramon Navarro, era depurar si la Municipalidad se habia excedido de sus facultades al tomar el acuerdo de 4 de Marzo, ya que sólo por esta razon cabia suspenderlo.

En concepto de la Seccion, no ofrece duda la resolucion de este punto, porque siendo el hecho, segun aparece de los documentos adjuntos, que el Ayuntamiento no habia autorizado las obras á que aludió D. Victor Soler en su denuncia de 10 de Setiembre de 1877, que fueron las que motivaron el interdicto, conforme se desprende de la sentencia del Juzgado; y que el Alcalde, por razones que no constan en el expediente, pero que es preciso depurar por si hubiese incurrido en responsabilidad, supuso en sus comunicaciones al Juez y al Gobernador que existia tal autorizacion, no es posible negar á aquella Corporacion la facultad de hacer constar que declinaba la responsabilidad que pudiera caberle á consecuencia de lo dicho por su Presidente; y como además procuró evitar, conforme se halla recomendado, un conflicto de atribuciones entre la Autoridad gubernativa y la judicial, cree la Seccion que no sólo fué legal el acuerdo, sino tambien acertado y conveniente.

No procediendo, por tanto, la suspension del acuerdo, estuvo en su lugar la providencia del Gobernador dejándola sin efecto.

Las resoluciones de los Ayuntamientos no son apelables, conforme al art. 171, más que cuando por ellas y en su forma se infrinje algun precepto legal; y como tan sólo una de las razones alegadas en el recurso tiene este carácter, de ella únicamente se hará cargo la Seccion.

Dícese que el acuerdo de 4 de Marzo es nulo porque tomó parte en la discusion y en la votacion un Concejal que está incapacitado para serlo; y resulta, en efecto, que en la sesion de 11 de Febrero se presentó una protesta contra la capacidad del Regidor á quien se alude y de otros dos más, y que el Ayuntamiento resolvió tratar del asunto en sesion secreta.

Reparable es que en 4 de Marzo no estuviese, segun parece, decidida todavia la cuestion; pero como legalmente la incapacidad no existe mientras no esté declarada por quien corresponde, fuerza es reconocer que, una vez que el Ayuntamiento no habia hecho semejante declaracion el dia 4 de Marzo, el Concejal D. Avelino Salazar estuvo en su derecho al asistir á sesion y al votar lo que juzgó conveniente; y por tanto, que su intervencion no afecta en lo más mínimo á la validez del acuerdo impugnado.

Hay que tener en cuenta además que aun en el caso de que dicho Regidor hubiese realizado tales actos despues de declarada su incapacidad para ejercer el cargo, este abuso no sería motivo bastante para anular el acuerdo, porque deducido su voto, única cosa procedente con arreglo á la jurisprudencia establecida en varias Reales órdenes, resultaria aquél adoptado por ocho votos contra uno.

Resumiendo lo expuesto, la Seccion opina que procede desestimar el recurso, y prevenir al Gobernador que instruya expediente á fin de depurar si el Alcalde incurrió en responsabilidad, y que ordene al Ayuntamiento que, en caso de no haberlo hecho ya, resuelva sin demora la protesta relativa á la incapacidad de tres de los Concejales de que se dió cuenta en la sesion de 11 de Febrero de 1878.

Y conformándose S. M. el REY (Q. D. G.) con el preinserto dictámen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Julio de 1879.
—Silvela.—Sr. Gobernador de la provincia de Murcia.

(Gaceta 8 Agosto de 1879.)

ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA.

RELACION de los compradores de bienes desamortizados cuyas obligaciones vencen en las fechas que á continuación se expresan, que se publica en este periódico oficial con diez dias de anticipacion al vencimiento, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 1.º, 3.º y 4.º de la Instruccion de 13 de Junio de 1878, sobre cobranza de débitos por compras de dicha clase de bienes; debiendo los Sres. Alcaldes fijar esta relacion á las puertas de las Casas consistoriales á fin de darle la mayor publicidad posible.

(CONTINUACION.)

NOMBRE DEL COMPRADOR.	SU DOMICILIO.	Clase y nombre de la finca.	Su procedencia.	Número del inventario.	TÉRMINO MUNICIPAL en que radica.	NÚMERO DE PLAZOS QUE SE ADEUADN y fechas de sus vencimientos.	IMPORTE de estos. Ptas. Cts.
D. Antonio Lascuen	Uncastillo.	Campo.	Clero.	4959	Uncastillo.	en 23 de Agosto de 1879.	98'81
Santiago Cortés	Longares.	Id.	Id.	4487	Longares.	en idem idem.	12'50
Pablo Solano	La Almunia.	Id.	Id.	4312	La Almunia.	en 24 idem idem.	33'75
Leandro Garcés	Belchite.	Bodega.	Id.	75	Belchite.	en idem idem.	100
Manuel Roy	La Almunia.	Campo.	Id.	4289	La Almunia.	en 25 idem idem.	38'81
El mismo.	Idem.	Id.	Id.	4305	Idem.	en idem idem.	37'50
El mismo.	Idem.	Id.	Id.	4282	Idem.	en idem idem.	107'50
El mismo.	Idem.	Id.	Id.	4319	Idem.	en idem idem.	187'50
El mismo.	Idem.	Id.	Id.	4323	Idem.	en idem idem.	46'25
El mismo.	Idem.	Id.	Id.	4280	Idem.	en idem idem.	190
Mariano Peña	Daroca.	Id.	Id.	3554	Daroca.	en idem idem.	251'25
Salvador Garcia	La Almunia.	Id.	Id.	4221	La Almunia.	en 27 idem idem.	57'50
Mariano Vallejo	Idem.	Id.	Id.	4298	Idem.	en idem 1873 y 79.	105'62
Francisco Argachal	Muel.	Huerta.	Id.	4499	Muel.	en idem idem.	115'96
El mismo.	Idem.	Campo.	Id.	4501	Idem.	en idem idem.	418'84
Mariano Arnedo	Idem.	Id.	Id.	4494	Idem.	en idem 1877 al 79.	195'03
Francisco Argachal	Idem.	Id.	Id.	4493	Idem.	en idem 1879.	102'56
Jacinto Aliaga	Idem.	Id.	Id.	4495	Idem.	en idem idem.	82'54
José Arqué	Alagon.	Id.	Id.	2550	Alagon.	en idem idem.	76'62
Ramon Abenia	Zaragoza.	Id.	Id.	1121	Azuara.	en idem idem.	20'06
José Garcia	Ricla.	Id.	Id.	4604	Ricla.	en idem idem.	75
El mismo.	Idem.	Id.	Id.	4617	Idem.	en 28 idem idem.	227'50
Mariano Roy	La Almunia.	Id.	Id.	4272	La Almunia.	en idem idem.	275
Pascual Gil	Alpartir.	Id.	Id.	4391	Alpartir.	en idem idem.	62'51
Bruno Alegrias	Daroca.	Olivar.	Id.	3546	Daroca.	en idem 1873 y 79.	400
José Navarro	Idem.	Campo.	Id.	3547	Idem.	en idem 1879.	57'50
El mismo.	Idem.	Id.	Id.	3608	Idem.	en idem idem.	190
Bruno Alegrias.	Idem.	Id.	Id.	3606	Ancoto.	en idem idem.	130
Carlos Mercadal	Idem.	Id.	Id.	4307	Idem.	en idem idem.	101'25
Manuel Marin	La Almunia.	Id.	Id.	4402	La Almunia.	en idem idem.	186'25
Manuel Cadenas	Longares.	Campo.	Id.	4413	Longares.	en 29 idem idem.	37'50
Pablo Pallarés	Daroca.	Id.	Id.	3562	Daroca.	en idem idem.	30
Vicente Liria	Zaragoza	Corral.	Id.	743	Zaragoza.	en 24 idem idem.	531'25
José Torrens	Ateca.	Campo.	Id.	5462	Ateca.	en 27 idem idem.	83'75
Valencin Gimeno	Alpartir.	Idem.	Id.	4380	Alpartir.	en 28 idem idem.	20
Ambrosio Ibarra	Zaragoza.	Olivar.	Id.	1074	Mara.	en 24 idem idem.	30'10
Remigio Dargallo	Villamayor.	Granero.	Id.	1076	Villamayor.	en idem 1875 y 79.	170
Manuel Gabete	Utebo.	Campo.	Id.	6480	Utebo.	en 25 idem 1875 al 79.	284

(Se continuará.)

SECCION SÉTIMA.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

Daroca.

D. Juan Breton, Juez de primera instancia de Daroca y su partido:

Por la presente requisitoria se cita, llama y emplaza á Antonio Sanchez Martin, vecino de Used, para que en el término de 12 dias comparezca en este Juzgado á prestar declaracion en causa que pende contra el mismo sobre hurto de reses lanares; bajo apercibimiento de que en otro caso se le declarará rebelde, parándole los perjuicios que haya lugar.

Y encargo á todas las Autoridades civiles y militares procedan á la captura de dicho sujeto, donde quiera que fuere habido, remitiéndolo con las seguridades debidas á las cárceles de este partido.

Dado en Daroca á 12 de Agosto de 1879.— Juan Breton.—José Gonzalvo.

Señas del prófugo.

Edad 44 años, estatura baja, pelo, cejas y ojos negros, barba cerrada, cara regular, color moreno; viste calzon y chaleco de paño negro, faja morada, polainas de cuero y abarcas.

D. Antonio Navarro y Pardos, Escribano del Juzgado de primera instancia de Daroca y su partido:

Doy fé: Que en el incidente de pobreza promovido en este Juzgado por Vicente Urgel y Vicente, vecino de Riela, para litigar contra Mariano Julian que lo es de Cerveruela, se ha pronunciado por este Juzgado la sentencia del tenor siguiente:

«Sentencia.—En la ciudad de Daroca á 6 de Agosto de 1879. El Sr. D. Juan Breton y Martinez, Juez de primera instancia de la misma y su partido: Visto este expediente:

Resultando que el Procurador D. Andrés Bruno en nombre de Vicente Urgel y Vicente, vecino de Riela, compareció en el Juzgado en solicitud de que se declarase pobre á su defendido para litigar con Mariano Julian, fundando su pretension en que no posee bienes de ninguna clase, segun la certificacion librada por el Secretario del Ayuntamiento de Riela D. Mariano Garcia Loscertales con el V.º B.º del Alcalde de dicho pueblo D. Santiago Aznar, y sellada con el de la Alcaldia el 18 de Julio último, y que asimismo no ejerce tráfico, industria ni granjería alguna, ni disfruta de rentas ni emolumentos de ningun género:

Resultando que el Ministerio fiscal se reservó el derecho de alegar lo que reputase justo conforme al resultado que ofrezca la prueba se proponga por la parte solicitante, y recibido el in-

cidente á prueba se han justificado legalmente los extremos alegados, estando conforme el Promotor fiscal en vista de tal justificacion, en que se otorgue á Vicente Urgel y Vicente el beneficio de pobreza que demanda:

Vistos:

Considerando que segun el art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil, los Tribunales deben declarar pobres para litigar á los que no les produzcan sus bienes el doble jornal de un bracero de la localidad del Juzgado de primera instancia á que pertenezca el pueblo del domicilio del demandante, en cuyo caso se encuentra el Urgel:

Considerando que con arreglo á lo alegado y probado, Vicente Urgel se encuentra comprendido en este caso, segun las declaraciones de testigos y documentos presentados, y por consiguiente con opcion al derecho de ser defendido como pobre:

Dijo: Que debia declarar y declaraba pobre en sentido legal para litigar á Vicente Urgel y Vicente, vecino de Riela, á quien se defienda y ayude como tal, gozando de los beneficios que á los de su clase otorga el art. 181 de la ántes citada ley, entendiéndose por ahora y sin perjuicio de lo prevenido para en su caso y tiempo en los artículos 198, 199 y 200 de la misma ley.

Publiquese esta sentencia en el BOLETIN OFICIAL de la provincia en la forma dispuesta en el art. 1.190 de la repetida ley, en razon á haber sido declarado rebelde por su no comparecencia en los autos el Mariano Julian, á quien en su caso podria perjudicar por ser con quien tiene que sostenerse el juicio.

Así por esta sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunció, mandó y firma el ántes dicho Sr. Juez, de que yo el Escribano doy fé.— Juan Breton.—Ante mí, Antonio Navarro.»

Asi resulta del incidente de pobreza de que se lleva hecho mérito.

Y para que conste y tenga lugar la insercion en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, expido el presente testimonio que firmo en Daroca á 12 de Agosto de 1879.—Antonio Navarro.

La Almunia.

D. Pedro Aquilino Dávila, Juez de primera instancia de La Almunia:

Por el presente primero y único edicto cito, llamo y emplazo á Santiago Gimeno Albricio, habitante en la ciudad de Zaragoza, calle de Enmedio, núm. 17, á fin de que en el término de ocho dias, á contar desde la insercion de este edicto en la *Gaceta de Madrid*, comparezca en este Juzgado á prestar declaracion en causa criminal ó manifieste el punto de su residencia; pues de no hacerlo le parará el perjuicio que haya lugar.

Dado en La Almunia á 12 de Agosto de 1879.—Pedro Aquilino Dávila.—D. S. O., Marcelino Ruiz de Luna.